

Ayotzinapa

Luis Hernández Navarro

La jornada

27 de noviembre de 2007

Guerrero es uno de los tres estados del país con mayor rezago educativo. Al menos 107 mil 672 niños de cinco a 14 años de edad no asisten a la escuela en la entidad, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es tan grave el problema que el noveno considerando de la Ley Educativa de la entidad reconoce: “que estamos rezagados en alfabetización, en educación preescolar, en primaria y en secundaria”.

Ironías de la nueva izquierda. Los planteles escolares de la entidad cierran por falta de maestros, pero el gobierno se niega a contratar más educadores. Tres mil personas cobran salarios en la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) sin laborar, pero 75 jóvenes que terminaron sus estudios de normalistas y que desean trabajar no tienen empleo.

Guerrero está gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que declara defender la educación pública, pero su mandatario Zeferino Torreblanca quiere reducir la matrícula escolar de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y acabar con la “alumnocracia” y el “desorden”, que, según él, privan en la institución escolar. Se niega a dar empleo a 75 alumnos egresados porque –dice– son “vándalos”.

El pasado 14 de noviembre la policía desalojó brutalmente del Congreso estatal a los muchachos, cuando realizaban una protesta. El gobernador sostuvo que su gobierno “hizo cumplir el estado de derecho”. Carlos Reyes, presidente del Congreso y militante del PRD, solicitó la intervención policial. El secretario de Gobierno, Armando Chavarría, ordenó actuar a la fuerza pública. El presidente del partido del sol azteca, Sebastián De la Rosa, respaldó la represión. En cambio, el diputado perredista Ramiro Solorio apoyó a los muchachos y criticó al mandatario. De inmediato se le amenazó con hacerle juicio político.

En Guerrero hay nueve escuelas normales públicas. Ayotzinapa es la única rural. Fue fundada hace 80 años. Allí estudió Lucio Cabañas, el mítico dirigente guerrillero. Egresó como profesor a los 27 años.

Quedan en el país solamente 16 normales rurales, todas bajo acoso gubernamental. Sus alumnos se aglutinan en la organización estudiantil más antigua de México: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Lucio fue su líder nacional en 1961, cuando todavía existían 28 escuelas de este tipo.

La matrícula escolar de Ayotzinapa es de 535 alumnos. Calzan huaraches. Todos son hijos de campesinos pobres de la Montaña, Sierra y Costa Chica de Guerrero. Serlo y tener certificado de bachillerato son condiciones para ingresar. Esta institución es una de las pocas opciones de movilidad social que tienen. A diferencia de otros maestros que buscan trabajar en las grandes ciudades, los que terminan sus estudios en ella desean enseñar en comunidades pobres y marginadas.

Al ingresar, los jóvenes viven internados en la escuela, reciben una beca de 35 pesos diarios y tres comidas al día en el comedor. El presupuesto para alimentación por alumno apenas alcanza 45 pesos diarios. El internado cuenta con dormitorios, baños y lavaderos muy modestos. En las áreas de cultivo los alumnos siembran, crían animales y preparan alimentos.

El director es nombrado por la SEG. Sin embargo, no puede tomar decisiones sin consultar al comité de estudiantes. Como sucede en todas las normales rurales, los jóvenes participan en la administración de la escuela y en las decisiones que los afectan.

Para el secretario de Educación del estado, el autogobierno y la educación rural son “costumbres” con las que hay que acabar. Asegura que ha llegado el momento de que los estudiantes entiendan que “lo que tradicionalmente venía ocurriendo ya no va a ocurrir”.

El conflicto no es nuevo. Cada año hay problemas similares con los normalistas que terminan sus estudios y requieren empleo. Y se resuelven negociando. Ciertamente hay obstáculos para ello. Durante las pasadas administraciones priístas la educación fue la caja chica de los mandatarios en turno. El ex gobernador René Juárez creó alrededor de 10 mil plazas sin tener los recursos presupuestales para mantenerlas. La SEG arrastra un déficit presupuestal de mil 500 millones de pesos. Además hay 3 mil aviadores.

Pero el problema de Ayotzinapa puede resolverse. Por ejemplo, quitando las plazas a quienes no trabajan. U ocupando las de los maestros que se van a jubilar. Hay más de 7 mil profesores con más de 30 años de servicio que están listos para retirarse.

¿Por qué entonces la bronca no se soluciona? Básicamente porque el gobernador no quiere hacerlo y porque ha mostrado una enorme falta de pericia política. Desprecia a los jóvenes estudiantes campesinos y no entiende la importancia de la educación rural. Privilegia los desplantes autoritarios a la negociación y el diálogo. Se comporta con los muchachos con una intransigencia y una rigidez que no tiene hacia los hoteleros que violan las disposiciones ambientales.

Othón Salazar, el legendario dirigente magisterial guerrerense, levantó la voz para condenar la agresión contra los normalistas. “No se vale echar mano de la acción represiva –dijo-. Toda

aquella persona que le interese resolver los problemas de Guerrero debe conocer qué razones tienen los jóvenes para plantear sus inquietudes.”

En sentido contrario de lo que afirma el gobernador y buena parte del PRD estatal, el profesor Salazar ve en Ayotzinapa “la única señal de vitalidad que todavía le queda a la nueva generación del estado de Guerrero. Hay que mantener a salvo la dignidad razonable para exigir derechos legítimos, en este caso de la muchachada de la normal rural. Es terrible que tenga uno que conseguir las cosas arrodillándose ante el poder”.

Ayotzinapa es, entre otras muchas cosas más, la muestra del fracaso de la descentralización educativa, pero también de cómo un partido que quiere a toda costa hacerse del poder se divorcia de su historia y su programa.

Twitter: [@lhan55](https://twitter.com/lhan55)

Fuente:

<https://www.jornada.com.mx/2007/11/27/index.php?section=opinion&article=019a1pol>